



Economía & Negocios

“ Nos parece que el enfoque de los potenciales ahorros debería ir más hacia ajustes que apunten al Mercado Público porque el sobreprecio que el Estado paga debería ser una prioridad (...). ”

Lorena Lobos, presidenta de la Anef-Biobío.

EMPLEADOS FISCALES SOLICITARÁN REUNIÓN CON NUEVO DELEGADO PRESIDENCIAL

Anef y CUT analizan escenario regional ante anuncio de ajuste en dotación de funcionarios

Piden foco en las compras del Estado y revisar costos de indemnizaciones en caso de nuevas solicitudes de “renuncias voluntarias”.

Edgardo Mora Cerda
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ante el anuncio de recorte del presupuesto fiscal total de los ministerios en un 3% durante el primer año del actual Gobierno y las posibilidades de variación de las actuales dotaciones de funcionarios públicos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de Biobío pidió

poner el foco en evitar sobreprecios en las compras públicas, junto con delimitar sueldos y cargos de confianza, entre otros. En tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) provincial Concepción espera ver “qué voluntad tendrá el nuevo Gobierno de potenciar la fiscalización para el cumplimiento del derecho de los trabajadores o disminuir esta

fiscalización para que ‘se genere más empleo’”. Lorena Lobos, presidenta de la Anef del Biobío y dirigente nacional del organismo, señaló que “generar un gasto eficiente de parte del Estado nos parece absolutamente razonable, pero entendiendo que se conozca en detalle el escenario que se debe abordar”.

Lobos resaltó, además, que “nos parece que el enfoque de los potenciales ahorros debería ir más hacia ajustes que apunten al Mercado Público porque el sobreprecio que el Estado paga debería ser una prioridad, más que el gasto en funcionarios donde también está el gasto asociado en asesorías, especialmente, aquellos altos sueldos en el segundo piso de La Moneda o de Senadores, Diputados o de jefes de gabinete”. En este punto, a modo de contexto, cabe señalar que Contraloría General de la República (CGR) detectó millonarias indemnizaciones y contrataciones irregulares que incluirían fallas en la compra de maquinaria en la Fábrica y Maestría del Ejército (FAMAE), durante el período 2022-2024. Lobos explicó también que están de acuerdo con que exista transparencia y un menor gasto en contratación de personal innecesario para el Estado que, “generalmente, se contrata para el servicio de los Gobiernos de turno y no al trabajo de línea

FOTO: CUT





FOTO: RAPHAEL SIERRA P.



que todos los funcionarios estamos acostumbrados a realizar, en los que nos hemos instruido y capacitado para hacer”.

Acerca de cuáles serán las principales demandas de los funcionarios públicos de la Región al Presidente, José Antonio Kast, y al delegado presidencial regional Julio Anativia, Lobos manifestó que “en lo regional, esperamos establecer un diálogo fluido con el actual delegado presidencial y partir resolviendo materias pendientes como la instalación del nuevo Gobierno local en general, porque hay muchas dudas como quiénes serán los nuevos seremis y qué autoridades de servicios elegidas por Alta Dirección Pública serán cambiadas”.

Sin hablar directamente de la “renuncia no voluntaria” requerida a la ahora exdirectora del Serviu, María Luz Gajardo, la también dirigente nacional de la ANEF fue clara en señalar que “hay que revisar el costo de las indemnizaciones de quienes se les soliciten dejar cargos de Alta Dirección Pública y el impacto que esto tiene cuando se busca reducir o recortar presupuestos de los ministerios. Sa-

ber cuántos directivos de este tipo se irán y cuáles serán sus reemplazos. Eso me gustaría conversarlo con el nuevo delegado presidencial”.

Desde la ANEF Biobío adelantaron que solicitarán una reunión con el nuevo delegado presidencial regional Julio Anativia para dialogar sobre las distintas materias de su interés.

Dotación actual de empleados fiscales

En relación con si es posible defender la dotación actual de empleados fiscales la dirigente detalló en diciembre de 2025 que existe subdotación de personal, particularmente, en el sector salud. “Hay que analizar cuántas políticas de Gobierno se administran porque si un ministerio administra 10 ó 15 políticas de Estado no puede tener solo 20 funcionarios y tenemos políticas que funcionan con cuatro o cinco personas. En Senama son alrededor de 20 funcionarios en la Región con una demanda altísima para lo que no se da abasto. Cuando se habla del Ministerio de Medio Ambiente, aquí la seremi tiene 15 funcionarios con todo lo significan las políticas

de cambio climático, o las consultas indígenas entre otros y en Fonasa son aproximadamente 40 funcionarios”.

Auditorías y “amarres”

En cuanto al anuncio de una auditoría por parte del Gobierno entrante, “tampoco sabemos quién la hará ni sus contenidos donde el organismo técnico fiscalizador, por excelencia, es la Contraloría General de la República, pero se dice que lo hará un organismo externo que no tendría valor en lo fiscal, entonces, existen muchas dudas”, acotó Lorena Lobos.

Sobre cuál es la posición de la Anef Biobío frente a los llamados “amarres” del gobierno saliente, expresó que en sus años de experiencia como dirigente, “en todas las distintas administraciones del Estado han denunciado lo mismo, sobre contrataciones y la instalación de personal que no es la línea de trabajo”.

CUT

Mikel Capetillo, presidente de la CUT Concepción, sobre el eventual efecto que pueda tener el recorte fiscal de 3% y un posible ajuste en las dotaciones

de los servicios públicos, señaló que “más allá de la aplicación real del recorte del 3% o no, en que se tenga una dotación mayor o menor de fiscalizadores, es el espíritu que pueda imprimir el nuevo Gobierno respecto de qué es para ellos fortalecer el trabajo”.

Lo anterior, dijo Capetillo es “para evitar lo que nos pasó en el Gobierno de Sebastián Piñera en que las unidades de salud ocupacional fueron prácticamente desmanteladas que incluyeron los equipos de fiscalización lo que también ocurrió en el caso de la Dirección del Trabajo”.

Por su parte, Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa el Empleo y la Industria de la región del Biobío manifestó esperar que “estos alrededor de 3 mil millones de dólares que se busca ahorrar con una nueva reasignación de presupuesto fiscal, no le peguen al empleo del sector público de forma que se puedan mantener los contratos que hoy están vigentes y las condiciones laborales”.

OPINIONES

X @MediosUdeC
contacto@diarioconcepcion.cl